



CORTE CONSTITUCIONAL

PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN

Quito, D.M., 13 de agosto del 2009

DICTAMEN N.º 009-09-DTI-CC

CASO: 0007-09-TI

LA CORTE CONSTITUCIONAL, para el período de transición

Juez Constitucional Sustanciador: Dr. Hernando Morales Vinueza

I. ANTECEDENTES

El economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República, mediante oficio N.º T.4475-SGJ-09-1482, del 09 de junio del 2009, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 438, numeral 1, de la Constitución de la República, solicita del pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, el dictamen previo y vinculante de constitucionalidad de la Convención sobre Municiones de Racimo.

II. CONVENCIÓN SOBRE MUNICIONES EN RACIMO

Los Estados Parte de la presente Convención,

Profundamente preocupados porque las poblaciones civiles y los civiles individualmente considerados continúan siendo los más afectados por los conflictos armados,

Decididos a poner fin definitivamente al sufrimiento y a las muertes causadas por las municiones en racimo en el momento de su uso, cuando no funcionan como se esperaba o cuando son abandonadas,

Preocupados porque los restos de municiones en racimo matan o mutilan a civiles, incluidos mujeres y niños, obstruyen el desarrollo económico y social, debido, entre otras razones, a la pérdida del sustento, impiden la rehabilitación

dw

post-conflicto y la reconstrucción, retrasan o impiden el regreso de refugiados y personas internamente desplazadas, pueden impactar negativamente en los esfuerzos nacionales e internacionales de construcción de la paz y asistencia humanitaria, además de tener otras graves consecuencias que pueden perdurar muchos años después de su uso,

Profundamente preocupados también por los peligros presentados por los grandes arsenales nacionales de municiones en racimo conservados para uso operacional, y *decididos* a asegurar su pronta destrucción,

Creyendo en la necesidad de contribuir realmente de manera eficiente y coordinada a resolver el desafío de eliminar los restos de municiones en racimo localizados en todo el mundo y asegurar su destrucción,

Decididos también a asegurar la plena realización de los derechos de todas las víctimas de municiones en racimo y *reconociendo* su inherente dignidad,

Resueltos a hacer todo lo posible para proporcionar asistencia a las víctimas de municiones en racimo, incluida atención médica, rehabilitación y apoyo psicológico, así como para proveer los medios para lograr su inclusión social y económica,

Reconociendo la necesidad de proporcionar a las víctimas de municiones en racimo asistencia que responda a la edad y al género y de abordar las necesidades especiales de los grupos vulnerables,

Teniendo presente la *Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad*, que, *inter alia*, exige que los Estados parte de esa Convención se comprometan a garantizar y promover la plena realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad sin discriminación de ningún tipo por motivos de la misma,

Conscientes de la necesidad de coordinar adecuadamente los esfuerzos emprendidos en varios foros para abordar los derechos y las necesidades de las víctimas de diferentes tipos de armas, y *resueltos* a evitar la discriminación entre las víctimas de diferentes tipos de armas,

Reafirmando que, en los casos no previstos en la presente Convención o en otros acuerdos internacionales, las personas civiles y los combatientes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del Derecho Internacional

d

ca



CORTE CONSTITUCIONAL

PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN

Caso N.º 0007-2009-TI

3

derivados de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública,

Resueltos también a que a los grupos armados que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas de un Estado no se les permita, en circunstancia alguna, participar en actividad alguna prohibida a un Estado Parte de la presente Convención,

Acogiendo con satisfacción el amplísimo apoyo internacional a la norma internacional que prohíbe el empleo de minas antipersonal, contenida en la *Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción* de 1997,

Acogiendo también con beneplácito la adopción del *Protocolo sobre restos explosivos de guerra*, anexo a la *Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados*, y su entrada en vigor el 12 de noviembre de 2006, y *con el deseo de* aumentar la protección de los civiles de los efectos de los restos de municiones en racimo en ambientes post-conflicto,

Teniendo presente también la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad, y la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados,

Dando además la bienvenida a las medidas tomadas en años recientes a nivel nacional, regional y global, dirigidas a prohibir, restringir o suspender el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de municiones en racimo,

Poniendo de relieve el papel desempeñado por la conciencia pública en el fomento de los principios humanitarios, como ha puesto de manifiesto el llamamiento global para poner fin al sufrimiento de los civiles causado por las municiones en racimo, y *reconociendo* el esfuerzo que a tal fin han realizado las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Coalición contra las Municiones en Racimo y otras numerosas organizaciones no gubernamentales de todo el mundo,

d
w

Reafirmando la Declaración de la Conferencia de Oslo sobre municiones en racimo, por la que, inter alia, los Estados reconocieron las graves consecuencias del uso de las municiones en racimo y se comprometieron a concluir para 2008 un instrumento jurídicamente vinculante que prohibiera el empleo, producción, transferencia y almacenamiento de municiones en racimo que causan daños inaceptables a civiles, y a establecer un marco de cooperación y asistencia que garantizara la adecuada prestación de atención y rehabilitación para las víctimas, la limpieza de áreas contaminadas, la educación sobre reducción de riesgos y la destrucción de los arsenales,

Poniendo de relieve la conveniencia de lograr la vinculación de todos los Estados a la presente Convención, y decididos a trabajar enérgicamente hacia la promoción de su universalización y su plena implementación,

Basándose en los principios y las normas del Derecho Internacional Humanitario, y particularmente en el principio según el cual el derecho de las partes participantes en un conflicto armado a elegir los métodos o medios de combate no es ilimitado, y en las normas que establecen que las partes de un conflicto deben en todo momento distinguir entre la población civil y los combatientes y entre bienes de carácter civil y objetivos militares y dirigir, por consiguiente, sus operaciones solamente contra objetivos militares; que en la realización de operaciones militares se prestará atención constante para salvaguardar a la población civil, a sus miembros y los bienes de carácter civil, y que la población civil y los civiles individualmente considerados disfrutan de protección general de los peligros derivados de las operaciones militares,

HAN CONVENIDO en lo siguiente:

Artículo 1

Obligaciones generales y ámbito de aplicación

1. Cada Estado Parte se compromete a nunca, y bajo ninguna circunstancia:

- (a) Emplear municiones en racimo;
- (b) Desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a nadie, directa o indirectamente, municiones en racimo;
- (c) Ayudar, alentar o inducir a nadie a participar en una actividad prohibida a un Estado Parte según lo establecido en la presente Convención.

d
m



CORTE CONSTITUCIONAL

PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN

Caso N.º 0007-2009-TI

5

2. El apartado primero de este Artículo se aplica, *mutatis mutandis*, a bombetas explosivas que están específicamente diseñadas para ser dispersadas o liberadas de dispositivos emisores fijados a aeronaves.

3. La presente Convención no se aplica a las minas.

Artículo 2 *Definiciones*

Para efectos de la presente Convención:

1. Por “**víctimas de municiones en racimo**” se entiende todas las personas que han perdido la vida o han sufrido un daño físico o psicológico, una pérdida económica, marginación social o un daño substancial en la realización de sus derechos debido al empleo de municiones en racimo. La definición incluye a aquellas personas directamente afectadas por las municiones en racimo, así como a los familiares y comunidades perjudicados;

2. Por “**munición en racimo**” se entiende una munición convencional que ha sido diseñada para dispersar o liberar submuniciones explosivas, cada una de ellas de un peso inferior a 20 kilogramos, y que incluye estas submuniciones explosivas. La definición no incluye:

- (a) Una munición o submunición diseñada para emitir bengalas, humo, efectos de pirotecnia o contramedidas de radar (“chaff”); o una munición diseñada exclusivamente con una función de defensa aérea;
- (b) Una munición o submunición diseñada para producir efectos eléctricos o electrónicos;
- (c) Una munición que, a fin de evitar efectos indiscriminados en una zona, así como los riesgos que entrañan las submuniciones sin estallar, reúne todas las características siguientes:
 - (i) Cada munición contiene menos de diez submuniciones explosivas;
 - (ii) Cada submunición explosiva pesa más de cuatro kilogramos;
 - (iii) Cada submunición explosiva está diseñada para detectar y atacar un objeto que constituya un blanco único;
 - (iv) Cada submunición explosiva está equipada con un mecanismo de autodestrucción electrónico;
 - (v) Cada submunición explosiva está equipada con un dispositivo de autodesactivación electrónico;

d
u

3. Por “**submunición explosiva**” se entiende una munición convencional que, para desarrollar su función, es dispersada o liberada por una munición en racimo y está diseñada para funcionar mediante la detonación de una carga explosiva antes del impacto, de manera simultánea al impacto o con posterioridad al mismo;

4. Por “**munición en racimo fallida**” se entiende una munición en racimo que ha sido disparada, soltada, lanzada, proyectada o arrojada de otro modo y que debería haber dispersado o liberado sus submuniciones explosivas pero no lo hizo;

5. Por “**submunición sin estallar**” se entiende una submunición explosiva que ha sido dispersada o liberada, o que se ha separado de otro modo, de una munición en racimo, y no ha estallado como se esperaba;

6. Por “**municiones en racimo abandonadas**” se entiende aquellas municiones en racimo o submuniciones explosivas que no han sido usadas y que han sido abandonadas o desechadas y ya no se encuentran bajo el control de la Parte que las abandonó o desechó. Pueden o no haber sido preparadas para su empleo;

7. Por “**restos de municiones en racimo**” se entiende municiones en racimo fallidas, municiones en racimo abandonadas, submuniciones sin estallar y bombetas sin estallar;

8. “**Transferencia**” supone, además del traslado físico de municiones en racimo dentro o fuera de un territorio nacional, la transferencia del dominio y control sobre municiones en racimo, pero no incluye la transferencia del territorio que contenga restos de municiones en racimo;

9. Por “**mecanismo de autodestrucción**” se entiende un mecanismo de funcionamiento automático incorporado que es adicional al mecanismo iniciador primario de la munición y que asegura la destrucción de la munición en la que está incorporado;

10. Por “**autodesactivación**” se entiende el hacer inactiva, de manera automática, una munición por medio del agotamiento irreversible de un componente, como, por ejemplo, una batería, que es esencial para el funcionamiento de la munición;

Handwritten marks:
A small symbol resembling a stylized 'd' or '4' is located at the bottom left.
Below it, there are several horizontal wavy lines, possibly representing a signature or scribble.



CORTE CONSTITUCIONAL

PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN

Caso N.º 0007-2009-TI

7

11. Por “**área contaminada con municiones en racimo**” se entiende un área que se sabe o se sospecha que contiene restos de municiones en racimo;

12. Por “**mina**” se entiende toda munición diseñada para colocarse debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebida para detonar o explotar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o de un vehículo;

13. Por “**bombeta explosiva**” se entiende una munición convencional, de menos de 20 kilogramos de peso, que no es autopropulsada y que, para realizar su función, debe ser dispersada o liberada por un dispositivo emisor, y que está diseñada para funcionar mediante la detonación de una carga explosiva antes del impacto, de manera simultánea al impacto o con posterioridad al mismo;

14. Por “**dispositivo emisor**” se entiende un contenedor que está diseñado para dispersar o liberar bombetas explosivas y que está fijado a una aeronave en el momento de la dispersión o liberación;

15. Por “**bombeta sin estallar**” se entiende una bombeta explosiva que ha sido dispersada, liberada o separada de otro modo de un emisor y no ha estallado como se esperaba.

Artículo 3

Almacenamiento y destrucción de reservas

1. Cada Estado Parte deberá, de conformidad con la legislación nacional, separar todas las municiones en racimo bajo su jurisdicción y control de las municiones conservadas para uso operacional y marcarlas para su destrucción.

2. Cada Estado Parte se compromete a destruir, o a asegurar la destrucción, de todas las municiones en racimo a las que se hace referencia en el apartado 1 de este Artículo lo antes posible y, a más tardar, en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado Parte. Cada Estado Parte se compromete a asegurar que los métodos de destrucción cumplan las normas internacionales aplicables para la protección de la salud pública y el medio ambiente.

3. Si un Estado Parte considera que no le será posible destruir o asegurar la destrucción de todas las municiones en racimo a las que se hace referencia en

el apartado 1 de este Artículo dentro de un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado, podrá presentar una solicitud a una Reunión de Estados Parte o a una Conferencia de Examen con el objeto de que se prorrogue hasta un máximo de cuatro años el plazo para completar la destrucción de dichas municiones en racimo. Un Estado Parte podrá, en circunstancias excepcionales, solicitar prórrogas adicionales de hasta cuatro años. Las prórrogas solicitadas no excederán el número de años estrictamente necesario para el cumplimiento de las obligaciones del Estado Parte conforme a lo establecido en el apartado 2 de este Artículo.

4. Cada solicitud de prórroga establecerá:

- (a) La duración de la prórroga propuesta;
- (b) Una explicación detallada de la prórroga propuesta, que incluirá los medios financieros y técnicos disponibles o requeridos por el Estado Parte para la destrucción de todas las municiones previstas en el apartado 1 de este Artículo y, de ser el caso, de las circunstancias excepcionales que la justifican;
- (c) Un plan sobre cómo y cuándo será completada la destrucción de las reservas;
- (d) La cantidad y tipo de municiones en racimo y submuniciones explosivas que el Estado Parte conserve en la fecha de entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado y cualesquiera municiones en racimo o submuniciones explosivas adicionales descubiertas después de dicha entrada en vigor;
- (e) La cantidad y tipo de municiones en racimo y submuniciones explosivas destruidas durante el plazo al que se hace referencia en el apartado 2 de este Artículo; y
- (f) La cantidad y tipo de municiones en racimo y submuniciones explosivas restantes a destruir durante la prórroga propuesta y la tasa anual de destrucción que se espere lograr.

5. La Reunión de Estados Parte o la Conferencia de Examen deberá, teniendo en cuenta los factores citados en el apartado 4 de este Artículo, evaluar la solicitud y decidir por mayoría de votos de los Estados Parte presentes y votantes si se concede la prórroga del plazo. Los Estados Parte podrán resolver conceder una prórroga menos extensa que la solicitada y podrán proponer puntos de referencia para la prórroga, si procede. Las solicitudes de prórroga deberán presentarse como mínimo nueve meses antes de la Reunión de Estados Parte o la Conferencia de Examen en la que será considerada.

42
f



CORTE CONSTITUCIONAL

PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN

Caso N.º 0007-2009-TI

9

6. Sin detrimento de lo previsto en el Artículo 1 de la presente Convención, la retención o adquisición de un número limitado de municiones en racimo y submuniciones explosivas para el desarrollo de y entrenamiento en técnicas de detección, limpieza y destrucción de municiones en racimo y submuniciones explosivas, o para el desarrollo de contramedidas, está permitido. La cantidad de submuniciones explosivas retenidas o adquiridas no excederá el número mínimo absolutamente necesario para estos fines.

7. Sin detrimento de lo previsto en el Artículo 1 de la presente Convención, la transferencia de municiones en racimo a otro Estado Parte para su destrucción, así como para los fines descritos en el apartado 6 de este Artículo, está permitida.

8. Los Estados Parte que retengan, adquieran o transfieran municiones en racimo o submuniciones explosivas para los fines descritos en los apartados 6 y 7 de este Artículo presentarán un informe detallado sobre el uso que se planea hacer y el uso fáctico de estas municiones en racimo y submuniciones explosivas, su tipo, cantidad y números de lote. Si las municiones en racimo o submuniciones explosivas se transfieren a otro Estado Parte con estos fines, el informe incluirá una referencia a la Parte receptora. Dicho informe se preparará para cada año durante el cual un Estado Parte haya retenido, adquirido o transferido municiones en racimo o submuniciones explosivas y se entregará al Secretario General de las Naciones Unidas a más tardar el 30 de abril del año siguiente.

Artículo 4

Limpieza y destrucción de restos de municiones en racimo y educación sobre reducción de riesgos

1. Cada Estado Parte se compromete a limpiar y destruir o asegurar la limpieza y destrucción de los restos de municiones en racimo ubicados en las áreas que se encuentren bajo su jurisdicción o control, de la siguiente manera:

- (a) Cuando los restos de municiones en racimo estén ubicados en áreas bajo su jurisdicción o control en el momento de la entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado Parte, dicha limpieza y destrucción deberá completarse lo antes posible, y, a más tardar, en un plazo de diez años a partir de ese día;
- (b) Cuando, después de la entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado Parte, las municiones en racimo se hayan convertido en restos de

d
or

municiones en racimo ubicados en áreas bajo su jurisdicción o control, la limpieza y destrucción deberá ser completada tan pronto como sea posible, y, a más tardar, diez años después del cese de las hostilidades activas durante las cuales tales municiones en racimo se convirtieron en restos de municiones en racimo; y

- (c) Una vez cumplida cualquiera de las obligaciones establecidas en los subapartados (a) y (b) de este apartado, el Estado Parte correspondiente hará una declaración de cumplimiento a la siguiente Reunión de Estados Parte.

2. En el cumplimiento de sus obligaciones conforme al apartado 1 de este Artículo, cada Estado Parte, tan pronto como le sea posible, tomará las siguientes medidas, tomando en consideración las disposiciones del Artículo 6 de la presente Convención en materia de cooperación y asistencia internacional:

- (a) Examinar, evaluar y registrar la amenaza que representan los restos de municiones en racimo, haciendo todos los esfuerzos posibles por identificar todas las áreas contaminadas con municiones en racimo bajo su jurisdicción o control;
- (b) Evaluar y priorizar las necesidades en términos de marcaje, protección de civiles, limpieza y destrucción, y adoptar medidas para movilizar recursos y elaborar un plan nacional para realizar estas actividades, reforzando, cuando proceda, las estructuras, experiencias y metodologías existentes;
- (c) Adoptar todas las medidas factibles para asegurar que todas las áreas contaminadas con municiones en racimo bajo su jurisdicción o control tengan el perímetro marcado, controlado y protegido con cercas o cualquier otro medio que permita asegurar la efectiva exclusión de civiles. Para señalar las zonas de presunto peligro se utilizarán señales de advertencia basadas en métodos de señalización fácilmente reconocibles por la comunidad afectada. Las señales y otras indicaciones de los límites de la zona de peligro deberán ser, en la medida de lo posible, visibles, legibles, duraderas y resistentes a los efectos ambientales, e indicar claramente qué lado del límite señalado se considera dentro del área contaminada con municiones en racimo y qué lado se considera seguro;
- (d) Limpiar y destruir todos los restos de municiones en racimo ubicados en áreas bajo su jurisdicción o control; y
- (e) Impartir educación sobre reducción de riesgos entre los civiles que viven dentro o en los alrededores de áreas contaminadas con municiones en



CORTE CONSTITUCIONAL

PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN

Caso N.º 0007-2009-TI

11

racimo, encaminada a asegurar la sensibilización sobre los riesgos que representan dichos restos.

3. En el desarrollo de las actividades a las que se hace referencia en el apartado 2 de este Artículo, cada Estado Parte tendrá en cuenta las normas internacionales, incluidas las *Normas internacionales sobre acción contra las minas* (IMAS, *International Mine Action Standards*).

4. Este apartado se aplicará en los casos en los cuales las municiones en racimo hayan sido empleadas o abandonadas por un Estado Parte antes de la entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado Parte y se hayan convertido en restos de municiones en racimo ubicados en áreas bajo la jurisdicción o control de otro Estado Parte en el momento de la entrada en vigor de la presente Convención para éste último.

(a) En esos casos, después de la entrada en vigor de la presente Convención para ambos Estados Parte, se alienta fervientemente al primero a proveer, *inter alia*, asistencia técnica, financiera, material o de recursos humanos al otro Estado Parte, ya sea de manera bilateral o a través de una tercera parte mutuamente acordada, que podrá incluir el Sistema de las Naciones Unidas o a otras organizaciones pertinentes, para facilitar el marcaje, limpieza y destrucción de dichos restos de municiones en racimo.

(b) Dicha asistencia incluirá, si estuviera disponible, información sobre los tipos y cantidades de municiones en racimo empleadas, la localización precisa de los ataques en los que fueron empleadas las municiones en racimo y las áreas en las que se sepa que están situados los restos de municiones en racimo.

5. Si un Estado Parte considera que no le será posible limpiar y destruir o asegurar la limpieza y destrucción de todos los restos de municiones en racimo a los que se hace referencia en el apartado 1 de este Artículo dentro de un período de diez años a partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte, podrá presentar una solicitud a una Reunión de Estados Parte o a una Conferencia de Examen con el objeto de que se prorrogue hasta un máximo de cinco años el plazo para completar la limpieza y destrucción de dichos restos de municiones en racimo. La prórroga solicitada no excederá el número de años estrictamente necesario para el cumplimiento de las obligaciones del Estado Parte conforme al apartado 1 de este Artículo.

6. Toda solicitud de prórroga será sometida a la Reunión de Estados Parte o a la Conferencia de Examen antes de que expire el periodo de tiempo estipulado en el apartado 1 de este Artículo para ese Estado Parte. Cada solicitud de

prórroga deberá presentarse como mínimo nueve meses antes de la Reunión de Estados Parte o la Conferencia de Examen en la que será considerada. Cada solicitud establecerá:

- (a) La duración de la prórroga propuesta;
- (b) Una explicación detallada de las razones por las que se solicita la prórroga propuesta, que incluirá los medios financieros y técnicos disponibles para y requeridos por el Estado Parte para la limpieza y destrucción de todos los restos de municiones en racimo durante la prórroga propuesta;
- (c) La preparación del trabajo futuro y la situación del trabajo ya realizado al amparo de los programas nacionales de limpieza y desminado durante el período inicial de diez años al que se hace referencia en el apartado 1 de este Artículo y en prórrogas subsiguientes;
- (d) El área total que contenga restos de municiones en racimo en el momento de la entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado Parte y cualquier área adicional que contenga restos de municiones en racimo descubierta con posterioridad a dicha entrada en vigor;
- (e) El área total que contenga restos de municiones en racimo limpiada desde la entrada en vigor de la presente Convención;
- (f) El área total que contenga restos de municiones en racimo que quede por limpiar durante la prórroga propuesta;
- (g) Las circunstancias que hayan mermado la capacidad del Estado Parte de destruir todos los restos de municiones en racimo localizados en áreas bajo su jurisdicción o control durante el período inicial de diez años establecido en el apartado 1 de este Artículo y las circunstancias que hayan mermado esta capacidad durante la prórroga propuesta;
- (h) Las implicaciones humanitarias, sociales, económicas y medioambientales de la prórroga propuesta; y
- (i) Cualquier otra información pertinente a la solicitud de la prórroga propuesta.

7. La Reunión de los Estados Parte o la Conferencia de Examen deberá, teniendo en cuenta los factores a los que se hace referencia en el apartado 6 de este Artículo, incluyendo, *inter alia*, las cantidades de restos de municiones en racimo de las que se haya dado parte, evaluar la solicitud y decidir por mayoría de votos de los Estados Parte presentes y votantes si se concede la ampliación del plazo. Los Estados Parte podrán resolver conferir una prórroga menos extensa que la solicitada y podrán proponer puntos de referencia para la prórroga, según sea apropiado.

d
cu



CORTE CONSTITUCIONAL

PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN

Caso N.º 0007-2009-TI

13

8. Dicha prórroga podrá ser renovada por un período de hasta cinco años con la presentación de una nueva solicitud, de conformidad con los apartados 5, 6 y 7 de este Artículo. Al solicitar una nueva prórroga, el Estado Parte deberá presentar información adicional pertinente sobre lo efectuado durante el previo período de prórroga concedido en virtud de este Artículo.

Artículo 5

Asistencia a las víctimas

1. Cada Estado Parte, con respecto a las víctimas de las municiones en racimo en áreas bajo su jurisdicción o control, de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario y el de Derecho Internacional de Derechos Humanos aplicables, proporcionará adecuadamente asistencia que responda a la edad y género, incluida atención médica, rehabilitación y apoyo psicológico, además de proveer los medios para lograr su inclusión social y económica. Cada Estado Parte hará todo lo posible por recopilar datos pertinentes y fiables relativos a las víctimas de municiones en racimo.

2. En cumplimiento de sus obligaciones conforme al apartado 1 de este Artículo, cada Estado Parte deberá:

- (a) Evaluar las necesidades de las víctimas de municiones en racimo;
- (b) Desarrollar, implementar y hacer cumplir todas las leyes y políticas nacionales necesarias;
- (c) Desarrollar un plan nacional y un presupuesto, incluidas estimaciones del tiempo necesario para llevar a cabo estas actividades, con vistas a incorporarlos en los marcos y mecanismos nacionales existentes de discapacidad, desarrollo y derechos humanos, siempre respetando el papel y contribución específicos de los actores pertinentes;
- (d) Adoptar medidas para movilizar recursos nacionales e internacionales;
- (e) No discriminar a las víctimas de municiones en racimo, ni establecer diferencias entre ellas, ni discriminar entre víctimas de municiones en racimo y aquéllos que han sufrido lesiones o discapacidades por otras causas; las diferencias en el trato deberán basarse únicamente en las necesidades médicas, de rehabilitación, psicológicas o socioeconómicas;
- (f) Consultar estrechamente e involucrar activamente a las víctimas de municiones en racimo y a las organizaciones que las representan;
- (g) Designar un punto de contacto dentro del Gobierno para coordinar los asuntos relativos a la implementación de este Artículo;

d
ar

- (h) Esforzarse por incorporar directrices pertinentes y mejores prácticas en las áreas de atención médica, rehabilitación y apoyo psicológico, así como inclusión social y económica, entre otras.

Artículo 6

Cooperación y asistencia internacional

1. En cumplimiento de sus obligaciones conforme a la presente Convención, cada Estado Parte tiene derecho a solicitar y recibir asistencia.

2. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo proporcionará asistencia técnica, material y financiera a los Estados Parte afectados por las municiones en racimo, con el objetivo de implementar las obligaciones de la presente Convención. Esta asistencia podrá ser otorgada, *inter alia*, a través del sistema de las Naciones Unidas, de organizaciones o instituciones internacionales, regionales o nacionales, de organizaciones o instituciones no gubernamentales, o de manera bilateral.

3. Cada Estado Parte se compromete a facilitar el intercambio más completo posible de equipo, información científica y tecnológica en relación con la implementación de la presente Convención, y tendrá derecho a participar en el mismo. Los Estados Parte no impondrán restricciones indebidas al suministro y recepción de equipos de remoción o equipos similares y de la correspondiente información tecnológica con fines humanitarios.

4. Además de cualquier obligación que pudiera tener de conformidad con el apartado 4 del Artículo 4 de la presente Convención, cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo proporcionará asistencia para la limpieza y destrucción de restos de municiones en racimo e información relativa a diversos medios y tecnologías relacionados con la remoción de municiones en racimo, así como listas de expertos, agencias especializadas o puntos de contacto nacionales vinculados con la limpieza y destrucción de restos de municiones en racimo y actividades relacionadas.

5. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo proporcionará asistencia para la destrucción de las reservas de municiones en racimo y también proporcionará asistencia para identificar, evaluar y priorizar necesidades y medidas prácticas en términos de marcaje, educación sobre

d
w



CORTE CONSTITUCIONAL

PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN

Caso N.º 0007-2009-TI

15

reducción de riesgos, protección de civiles y limpieza y destrucción de acuerdo con lo establecido en el Artículo 4 de la presente Convención.

6. Cuando, después de la entrada en vigor de la presente Convención, las municiones en racimo se hayan convertido en restos de municiones en racimo ubicados en áreas bajo la jurisdicción o control de un Estado Parte, cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo proporcionará de manera urgente asistencia de emergencia al Estado Parte afectado.

7. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo proporcionará asistencia para la implementación de las obligaciones a las que se hace referencia en el Artículo 5 de la presente Convención, relativas a proporcionar adecuadamente asistencia que responda a la edad y género, incluida atención médica, rehabilitación y apoyo psicológico, y a proveer los medios para lograr la inclusión social y económica de las víctimas de municiones en racimo. Esta asistencia puede ser otorgada, *inter alia*, a través del sistema de las Naciones Unidas, de organizaciones o instituciones internacionales, regionales o nacionales, del Comité Internacional de la Cruz Roja y las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y su Federación Internacional, de organizaciones no gubernamentales, o de manera bilateral.

8. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo proporcionará asistencia para contribuir a la recuperación económica y social necesaria resultante del empleo de municiones en racimo en los Estados Parte afectados.

9. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo podrá realizar contribuciones a fondos fiduciarios pertinentes, para facilitar la prestación de la asistencia prevista en este Artículo.

10. Cada Estado Parte que solicite y reciba asistencia deberá adoptar todas las medidas para facilitar la implementación eficaz y oportuna de la presente Convención, incluyendo la facilitación de la entrada y salida de personal, material y equipo, de conformidad con la legislación y normas nacionales, tomando en consideración las mejores prácticas internacionales.

11. Cada Estado Parte podrá, con el fin de elaborar un plan de acción nacional, solicitar a las Naciones Unidas, a las organizaciones regionales, a otros Estados Parte o a otras instituciones intergubernamentales o no gubernamentales competentes que presten asistencia a sus autoridades para determinar, *inter alia*:

d
chr

- (a) La naturaleza y alcance de los restos de municiones en racimo localizados en áreas bajo su jurisdicción o control;
- (b) Los recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios para la ejecución del plan;
- (c) El tiempo que se estime necesario para limpiar y destruir todos los restos de municiones en racimo localizados en áreas bajo su jurisdicción o control;
- (d) Programas de educación sobre reducción de riesgos y actividades de sensibilización para reducir la incidencia de las lesiones o muertes causadas por los restos de municiones en racimo;
- (e) Asistencia a las víctimas de municiones en racimo; y
- (f) La relación de coordinación entre el Gobierno del Estado Parte en cuestión y las entidades gubernamentales, intergubernamentales o no gubernamentales pertinentes que hayan de trabajar en la ejecución del plan.

12. Los Estados Parte que proporcionen y reciban asistencia de conformidad con las disposiciones de este Artículo deberán cooperar con el objeto de garantizar la completa y rápida puesta en práctica de los programas de asistencia acordados.

Artículo 7 *Medidas de Transparencia*

1. Cada Estado Parte informará al Secretario General de las Naciones Unidas tan pronto como sea posible y, en cualquier caso, no más tarde de 180 días a partir de la entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado Parte, sobre:

- (a) Las medidas de implementación a nivel nacional a las que se hace referencia en el Artículo 9 de la presente Convención;
- (b) El total de todas las municiones en racimo, incluidas las submuniciones explosivas, a las que se hace referencia en el apartado 1 del Artículo 3 de la presente Convención, con un desglose del tipo, cantidad y, si fuera posible, los números de lote de cada tipo;
- (c) Las características técnicas de cada tipo de munición en racimo producida por ese Estado Parte con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado, hasta donde se conozcan, y de aquellas que pertenezcan actualmente a dicho Estado o que éste posea, dándose a conocer, cuando fuera razonablemente posible, las categorías de



CORTE CONSTITUCIONAL

PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN

Caso N.º 0007-2009-TI

17

información que puedan facilitar la identificación y remoción de las municiones en racimo; como mínimo, la información incluirá las dimensiones, espoletas, contenido explosivo, contenido metálico, fotografías en color y cualquier otra información que pueda facilitar la remoción de los restos de municiones en racimo;

- (d) La situación y el avance de los programas de reconversión o cierre definitivo de las instalaciones de producción de municiones en racimo;
- (e) La situación y el avance de los programas de destrucción, de conformidad con el Artículo 3 de la presente Convención, de las municiones en racimo, incluidas las submuniciones explosivas, con detalles de los métodos que se utilizarán en la destrucción, la ubicación de todos los lugares donde tendrá lugar la destrucción y las normas aplicables que hayan de observarse en materia de seguridad y medio ambiente;
- (f) Los tipos y cantidades de municiones en racimo, incluidas submuniciones explosivas, destruidas de conformidad con el Artículo 3 de la presente Convención, con detalles de los métodos de destrucción utilizados, la ubicación de los lugares de destrucción, así como las normas aplicables que en materia de seguridad y medio ambiente hayan sido observadas;
- (g) Las reservas de municiones en racimo, incluidas submuniciones explosivas, descubiertas luego de haber informado de la conclusión del programa al que se hace referencia en el subapartado (e) de este apartado, y los planes de destrucción de las mismas conforme al Artículo 3 de la presente Convención;
- (h) En la medida de lo posible, la ubicación de todas las áreas contaminadas con municiones en racimo que se encuentren bajo su jurisdicción o control, con la mayor cantidad posible de detalles relativos al tipo y cantidad de cada tipo de resto de munición en racimo en cada área afectada y cuándo fueron empleadas;
- (i) La situación y el avance de los programas de limpieza y destrucción de todos los tipos y cantidades de restos de municiones en racimo removidos y destruidos de conformidad con el Artículo 4 de la presente Convención, incluido el tamaño y la ubicación del área contaminada con municiones en racimo limpiada y un desglose de la cantidad de cada tipo de restos de municiones en racimo limpiado y destruido;
- (j) Las medidas adoptadas para impartir educación sobre reducción de riesgos y, en especial, una advertencia inmediata y eficaz a los civiles que viven en las áreas bajo su jurisdicción o control que se encuentren contaminadas con municiones en racimo;
- (k) La situación y el avance de la implementación de sus obligaciones conforme al Artículo 5 de la presente Convención, relativas a proporcionar

d
u

adecuadamente asistencia que responda a la edad y género, incluida atención médica, rehabilitación y apoyo psicológico, así como a proveer los medios para lograr la inclusión social y económica de las víctimas de municiones en racimo, y de reunir información fiable y pertinente respecto a las víctimas de municiones en racimo;

- (l) El nombre y los datos de contacto de las instituciones con el mandato de proporcionar información y llevar a cabo las medidas descritas en este apartado;
- (m) La cantidad de recursos nacionales, incluidos los financieros, materiales o en especie, asignados a la implementación de los Artículos 3, 4 y 5 de la presente Convención; y
- (n) Las cantidades, tipos y destinos de la cooperación y asistencia internacionales proporcionadas conforme al Artículo 6 de la presente Convención.

2. La información proporcionada de conformidad con el apartado 1 de este Artículo se actualizará anualmente por cada Estado Parte respecto al año calendario precedente, y deberá ser presentada al Secretario General de las Naciones Unidas a más tardar el 30 de abril de cada año.

3. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes recibidos a los Estados Parte.

Artículo 8

Facilitación y aclaración de cumplimiento

1. Los Estados Parte acuerdan consultarse y cooperar entre sí con respecto a la aplicación de las disposiciones de la presente Convención, y trabajar conjuntamente con espíritu de cooperación para facilitar el cumplimiento por parte de los Estados Parte de sus obligaciones conforme a la presente Convención.

2. Si uno o más Estados Parte desean aclarar y buscan resolver cuestiones relacionadas con un asunto de cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención por parte de otro Estado Parte, pueden presentar, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, una Solicitud de Aclaración de dicho asunto a ese Estado Parte. La solicitud deberá estar acompañada de toda la información que corresponda. Cada Estado Parte se abstendrá de presentar solicitudes de Aclaración infundadas, procurando no abusar de ese mecanismo. Un Estado Parte que reciba una Solicitud de

d
etc



CORTE CONSTITUCIONAL

PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN

Caso N.º 0007-2009-TI

19

Aclaración entregará, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, en un plazo de 28 días, al Estado Parte solicitante toda la información necesaria para aclarar el asunto.

3. Si el Estado Parte solicitante no recibe respuesta por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas dentro del plazo mencionado, o considera que ésta no es satisfactoria, podrá someter, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, el asunto a la siguiente Reunión de los Estados Parte. El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá a todos los Estados Parte la solicitud presentada, acompañada de toda información pertinente a la Solicitud de Aclaración. Toda esa información se presentará al Estado Parte del que se solicita la aclaración, el cual tendrá el derecho de réplica.

4. Mientras esté pendiente la convocatoria de la Reunión de Estados Parte, cualquiera de los Estados Parte interesados puede solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas ejercer sus buenos oficios para facilitar la aclaración solicitada.

5. Cuando, según lo estipulado en el apartado 3 de este Artículo, se haya presentado un asunto específico para ser tratado en la Reunión de los Estados Parte, ésta deberá determinar en primer lugar si ha de proseguir con la consideración del asunto, teniendo en cuenta toda la información presentada por los Estados Parte interesados. En caso de que se determine que sí, la Reunión de Estados Parte puede sugerir a los Estados Parte interesados formas y medios para aclarar o resolver el asunto en consideración, incluido el inicio de los procedimientos pertinentes de conformidad con el Derecho Internacional. En caso de que se determine que el tema en cuestión es originado por circunstancias que escapan al control del Estado Parte al que se ha solicitado la aclaración, la Reunión de Estados Parte podrá recomendar las medidas apropiadas, incluido el uso de medidas cooperativas a las que se hace referencia en el Artículo 6 de la presente Convención.

6. Adicionalmente a los procedimientos establecidos en los apartados del 2 al 5 de este Artículo, la Reunión de Estados Parte podrá decidir adoptar otros procedimientos generales o mecanismos específicos para la aclaración de cumplimiento, incluidos hechos, y la resolución de situaciones de incumplimiento de las disposiciones de la Convención, según considere apropiado.

Artículo 9

Medidas de implementación a nivel nacional

Cada Estado Parte adoptará todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que procedan para implementar la presente Convención, incluida la imposición de sanciones penales para prevenir y reprimir cualquier actividad prohibida a los Estados Parte conforme a la presente Convención que haya sido cometida por personas o en territorio bajo su jurisdicción o control.

Artículo 10

Solución de controversias

1. En caso de surgir alguna controversia entre dos o más Estados Parte en relación a la interpretación o aplicación de la presente Convención, los Estados Parte interesados se consultarán mutuamente con el propósito de obtener una pronta solución a la controversia a través de la negociación o por algún otro medio pacífico de su elección, incluido el recurso a la Reunión de los Estados Parte y la sumisión de la controversia a la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el Estatuto de la Corte.

2. La Reunión de los Estados Parte podrá contribuir a la solución de las controversias por cualesquiera medios que considere apropiados, incluido el ofrecimiento de sus buenos oficios, instando a los Estados Parte interesados a que comiencen los procedimientos de resolución de su elección y recomendando un plazo para cualquier procedimiento acordado.

Artículo 11

Reuniones de los Estados Parte

1. Los Estados Parte se reunirán regularmente para considerar y, cuando sea necesario, tomar decisiones en relación a algún asunto relativo a la aplicación o implementación de la presente Convención, incluidos:

- (a) El funcionamiento y el estado de aplicación de la presente Convención;
- (b) Los asuntos relacionados con los informes presentados conforme a las disposiciones de la presente Convención;
- (c) La cooperación y la asistencia internacionales según lo previsto en el Artículo 6 de la presente Convención;
- (d) El desarrollo de tecnologías para la remoción de los restos de municiones en racimo;

d
ca



CORTE CONSTITUCIONAL

PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN

Caso N.º 0007-2009-TI

21

- (e) Las solicitudes de los Estados Parte a las que se refieren los Artículos 8 y 10 de la presente Convención; y
- (f) Las solicitudes de los Estados Parte de acuerdo con lo previsto en los Artículos 3 y 4 de la presente Convención.

2. La primera Reunión de los Estados Parte será convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Convención. Las reuniones subsiguientes serán convocadas anualmente por el Secretario General de las Naciones Unidas hasta la primera Conferencia de Examen.

3. Los Estados no Parte de la presente Convención, así como las Naciones Unidas, otras organizaciones o instituciones internacionales pertinentes, organizaciones regionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y organizaciones no gubernamentales pertinentes podrán ser invitados a asistir a estas reuniones en calidad de observadores, de acuerdo con las reglas de procedimiento acordadas.

Artículo 12

Conferencias de Examen

1. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará una Conferencia de Examen transcurridos cinco años desde la entrada en vigor de la presente Convención. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará otras Conferencias de Examen si así lo solicitan uno o más Estados Parte, siempre y cuando el intervalo entre ellas no sea menor de cinco años. Todos los Estados Parte de la presente Convención serán invitados a todas las Conferencias de Examen.

2. La finalidad de la Conferencia de Examen será:

- (a) Evaluar el funcionamiento y el estado de aplicación de la presente Convención;
- (b) Considerar la necesidad de celebrar Reuniones adicionales de los Estados Parte, a las que se refiere el apartado 2 del Artículo 11 de la presente Convención, así como el intervalo que haya de existir entre ellas; y
- (c) Tomar decisiones sobre las solicitudes de los Estados Parte previstas en los Artículos 3 y 4 de la presente Convención.

Handwritten initials

3. Los Estados no Parte de la presente Convención, así como las Naciones Unidas, otras organizaciones o instituciones internacionales pertinentes, organizaciones regionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y organizaciones no gubernamentales pertinentes podrán ser invitados a asistir a las Conferencias de Examen en calidad de observadores, de acuerdo con las reglas de procedimiento acordadas.

Artículo 13
Enmiendas

1. Todo Estado Parte podrá, en cualquier momento después de la entrada en vigor de la presente Convención, proponer enmiendas a la misma. Toda propuesta de enmienda se comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, quien la hará circular entre todos los Estados Parte y pedirá su opinión sobre si se debe convocar una Conferencia de Enmienda para considerar la propuesta. Si una mayoría de los Estados Parte notifica al Secretario General, a más tardar 90 días después de su circulación, que está a favor de proseguir con la consideración de la propuesta, el Secretario General convocará una Conferencia de Enmienda a la cual se invitará a todos los Estados Parte.

2. Los Estados no Parte de la presente Convención, así como las Naciones Unidas, otras organizaciones o instituciones internacionales pertinentes, organizaciones regionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y organizaciones no gubernamentales pertinentes podrán ser invitados a asistir a cada Conferencia de Enmienda en calidad de observadores de conformidad con las reglas de procedimiento acordadas.

3. La Conferencia de Enmienda se celebrará inmediatamente después de una Reunión de los Estados Parte o una Conferencia de Examen, a menos que una mayoría de los Estados Parte solicite que se celebre antes.

4. Toda enmienda a la presente Convención será adoptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes en la Conferencia de Enmienda. El Depositario comunicará toda enmienda así adoptada a todos los Estados.

5. Toda enmienda a la presente Convención entrará en vigor para los Estados Parte que hayan aceptado la enmienda en la fecha de depósito de las

d
en



CORTE CONSTITUCIONAL

PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN

Caso N.º 0007-2009-TI

23

aceptaciones por una mayoría de los Estados que eran Parte en la fecha de adopción de la enmienda. En adelante, entrará en vigor para los demás Estados Parte en la fecha en que depositen su instrumento de aceptación.

Artículo 14

Costos y tareas administrativas

1. Los costos de las Reuniones de los Estados Parte, Conferencias de Examen y Conferencias de Enmienda serán sufragados por los Estados Parte y por los Estados no Parte de la presente Convención que participen en ellas, de acuerdo con la escala de cuotas de las Naciones Unidas adecuadamente ajustada.
2. Los costos en que incurra el Secretario General de las Naciones Unidas con arreglo a los Artículos 7 y 8 de la presente Convención serán sufragados por los Estados Parte de conformidad con la escala de cuotas de las Naciones Unidas adecuadamente ajustada.
3. La ejecución por parte del Secretario General de las Naciones Unidas de las tareas administrativas que se le asignan en virtud de la presente Convención se encuentra sujeta al mandato correspondiente de las Naciones Unidas.

Artículo 15

Firma

La presente Convención, hecha en Dublín el 30 de mayo de 2008, estará abierta a todos los Estados para su firma en Oslo el 3 de diciembre de 2008 y después de esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, hasta su entrada en vigor.

Artículo 16

Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión

1. La presente Convención está sujeta a la ratificación, la aceptación o la aprobación de los Signatarios.
2. La Convención estará abierta a la adhesión de cualquier Estado que no la haya firmado.

3. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán ante el Depositario.

Artículo 17
Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor el primer día del sexto mes a partir de la fecha de depósito del trigésimo instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión.

2. Para cualquier Estado que deposite su instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión a partir de la fecha de depósito del trigésimo instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión, la presente Convención entrará en vigor el primer día del sexto mes a partir de la fecha de depósito por parte de ese Estado de su instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión.

Artículo 18
Aplicación provisional

Cualquier Estado podrá, en el momento de ratificar, aceptar, aprobar o adherirse a la presente Convención, declarar que aplicará provisionalmente el Artículo 1 de la misma mientras esté pendiente su entrada en vigor para tal Estado.

Artículo 19
Reservas

Los Artículos de la presente Convención no estarán sujetos a reservas.

Artículo 20
Duración y denuncia

1. La presente Convención tendrá duración ilimitada.

2. Cada Estado Parte tendrá, en ejercicio de su soberanía nacional, el derecho de denunciar la presente Convención. Comunicará dicha denuncia a todos los Estados Parte, al Depositario y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tal instrumento de denuncia deberá incluir una explicación completa de las razones que motivan la denuncia.

d
cu



CORTE CONSTITUCIONAL

PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN

Caso N.º 0007-2009-TI

25

3. Tal denuncia sólo surtirá efecto seis meses después de la recepción del instrumento de denuncia por parte del Depositario. Sin embargo, si al término de ese período de seis meses, el Estado Parte denunciante está involucrado en un conflicto armado, la denuncia no surtirá efecto antes del final del conflicto armado.

Artículo 21

Relaciones con Estados no Parte de la presente Convención

1. Cada Estado Parte alentará a los Estados no Parte a ratificar, aceptar, aprobar o adherirse a la presente Convención, con el objetivo de lograr la vinculación de todos los Estados a la presente Convención.
2. Cada Estado Parte notificará a los gobiernos de los Estados no Parte de la presente Convención, a los que se hace referencia en el apartado 3 de este Artículo, de sus obligaciones conforme a la presente Convención, promoverá las normas que ésta establece y hará todos los esfuerzos posibles por desalentar a los Estados no Parte de la presente Convención de utilizar municiones en racimo.
3. Sin detrimento de lo previsto en el Artículo 1 de la presente Convención y de conformidad con el Derecho Internacional, los Estados Parte, su personal militar o sus nacionales podrán cooperar militarmente y participar en operaciones con Estados no Parte de la presente Convención que pudieran desarrollar actividades que estén prohibidas a un Estado Parte.
4. Nada de lo dispuesto en el apartado 3 de este Artículo autorizará a un Estado Parte a:
 - (a) Desarrollar, producir o adquirir de un modo u otro, municiones en racimo;
 - (b) Almacenar él mismo o transferir municiones en racimo;
 - (c) Utilizar él mismo municiones en racimo; o
 - (d) Solicitar expresamente el uso de municiones en racimo en casos en los que la elección de las municiones utilizadas se encuentre bajo su control exclusivo.

d

cel

Artículo 22
Depositario

El Secretario General de las Naciones Unidas será el Depositario de la presente Convención.

Artículo 23
Textos auténticos

Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de la presente Convención serán igualmente auténticos.

**III. CRITERIOS PREVIOS RELATIVOS AL TRÁMITE PERTINENTE
PARA LA RATIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN**

Conforme señala el señor Presidente de la República en la solicitud de dictamen de constitucionalidad, la Convención prohíbe el empleo, producción, transferencia y almacenamiento de municiones de racimo, causantes de daños inaceptables a civiles y establece un marco de cooperación y asistencia para la adecuada atención y rehabilitación de las víctimas. En este contexto, la Convención impone a cada Estado Parte, la adopción de medidas legales, administrativas y de otra índole para implementar la Convención, dentro de estas se incluye la imposición de sanciones penales para prevenir y reprimir cualquier actividad prohibida, mas, en la legislación penal ecuatoriana no existe tipificación para reprimir la utilización de las municiones en racimo.

En efecto, en tanto la Convención prevé la adopción de medidas legales para su implementación, concretamente para la prevención y represión de actividades prohibidas en el referido instrumento internacional, corresponderá al Estado Ecuatoriano expedir la normativa legal pertinente que tipifique las correspondientes infracciones y sanciones por incurrir en actividades prohibidas en la Convención, en aplicación del principio de legalidad previsto en el artículo 76, numeral 3, que estatuye: "*Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza (...)*".

De acuerdo a lo previsto en el artículo 419 de la Constitución, se requiere previa aprobación de la Asamblea Nacional para la ratificación de los tratados internacionales por parte del Presidente de la República, entre otros, cuando

ce
d



CORTE CONSTITUCIONAL

PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN

Caso N.º 0007-2009-TI

27

“Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley.”
(Numeral 3).

La Convención sometida a examen de constitucionalidad, encontrándose en la previsión del artículo 419, numeral 3 de la Carta Fundamental, por contener el compromiso de adecuación del ordenamiento jurídico en relación a la tipificación de infracciones y determinación de sanciones, debe ser sometida a aprobación de la Asamblea Nacional a fin de que el Presidente de la República pueda ratificarla posteriormente.

III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Competencia de la Corte Constitucional para el período de transición

Conforme con lo que establece el artículo 438, numeral 1 de la Constitución de la República, la Corte Constitucional tiene competencia para emitir dictamen previo y vinculante de tratados internacionales *“previamente a su ratificación por parte de la Asamblea Nacional.”*

Conviene aclarar que el término “ratificación”, utilizado en la disposición constitucional, no es el adecuado, pues a quien corresponde ratificar un tratado internacional es al Presidente de la República, en tanto que a la Asamblea Nacional le corresponde aprobarlo previamente a la ratificación¹. Con esta aclaración, la Corte ratifica su competencia para pronunciar dictamen de constitucionalidad en el presente caso, referido a la Convención sobre Municiones en Racimo, por tratarse de un instrumento internacional que deberá aprobar la Asamblea Nacional.

Antecedentes de la Convención

Previo al análisis de constitucionalidad de la Convención, la Corte estima necesario efectuar una breve referencia a la realidad que conlleva el uso de las municiones en racimo, referencia que se realiza con base en datos e informes

¹ La Corte ha señalado, citando a Germán Bidart Campos, las siguientes etapas por las que transita un Tratado Internacional: a) Negociación a cargo del Ejecutivo; b) Firma a cargo del Ejecutivo; c) Aprobación a cargo del Congreso; y, d) Ratificación a cargo del Ejecutivo. (Sentencia N.º 0002-09-TI). Por lo expuesto, se ratifica la atribución de la Asamblea Nacional para aprobar los tratados constantes en el artículo 419 de la Constitución, como, en efecto, prevé tal artículo.

realizados por organismos especializados internacionales humanitarios² y de humanos.

¿Qué son las bombas de racimo?

Son grandes sistemas de armamento que contienen múltiples bombetas más pequeñas (a veces cientos de ellas) que pueden ser lanzadas desde el aire o disparadas por sistemas terrestres. Son armas de efecto zonal, pues su impacto no se limita a un objetivo preciso. El dispositivo que contiene las armas de racimo, al abrirse en el aire, dispersa las bombetas sobre una extensa área. Este impacto se denomina “huella”. A las bombas en racimo también se las conoce como “municiones en racimo” y a las bombetas se las llama también “submuniciones”.

¿Qué problemas humanitarios causan estas bombas?

Aunque sería deseable que ningún armamento fuera permitido en el mundo, la realidad expresa que frente a los conflictos entre naciones, o internamente, no existe voluntad de solución que no sea por las armas, sometiendo a los pueblos a prácticas inhumanas que ocasionan muertes, lesiones, sufrimiento, desastre y pobreza, por lo que el esfuerzo de la comunidad internacional por establecer los efectos que causan determinadas armas con el propósito de acordar prohibiciones, es altamente positivo, con miras a llegar a acuerdos que disminuyan los efectos.

En efecto, como advierte la Red de Promotores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de Colombia: *“Los seres humanos no hemos tenido el temperamento apropiado para vivir permanentemente en paz y armonía. Por ello, dentro de lo que para algunos constituye una verdadera paradoja, hemos decidido elaborar un catálogo de límites a la violencia. Esto quiere decir que ante nuestra voluntaria y consciente incapacidad de solucionar los conflictos de manera pacífica, nos hemos conformado con crear unas reglas que se debe seguir en el evento de encontrarnos frente a una situación bélica”*.³

² La información se ha tomado de informes de Organismos de Derechos Humanitarios como Cruz Roja Internacional, Human Rights Watch, Handicap Internacional, Cluster Muniton Coalition.

³ Red de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, *Derecho Internacional Humanitario*, Bogotá, Imprenta Nacional de Colombia, p. 2

d
mr



CORTE CONSTITUCIONAL

PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN

Caso N.º 0007-2009-TI

29

Por estas razones, es conveniente establecer los problemas humanitarios principales que provoca la utilización de municiones en racimo.

Dos problemas humanitarios se pueden señalar:

- a) El impacto sobre los civiles en el momento de su uso, debido a que causan efectos en áreas indiscriminadas, pues esparcen submuniciones al azar a través de grandes áreas por los que sus efectos, denominados zonales, causan muertes y lesiones en militares y civiles;
- b) El impacto sobre la población civil después de un ataque, ya que son armas que dejan gran cantidad de submuniciones sin explotar, por lo que las áreas bombardeadas con municiones en racimo sufren una densa contaminación con submuniciones sin estallar, debiendo ser tratadas y destruidas, pudiendo explotar cuando los niños las recogen o cuando las personas las golpean con sus herramientas de trabajo en la tierra o mientras desarrollan otras actividades para su sustento. Las submuniciones sin estallar son más letales que las minas antipersonales,

El efecto de la existencia de bombetas sin estallar esparcidas en amplias zonas constituye un riesgo para la vida y los medios de subsistencia de las personas, incluso mucho después de la terminación de un conflicto, causando, además, el empobrecimiento de grandes sectores de población.

Debido a que las bombetas en racimo están diseñadas para perforar el blindaje de los tanques, cuentan con una mayor cantidad de explosivos que una mina terrestre antipersonal, por lo que cuando explotan, dispersan fragmentos o metralla sobre un área de hasta un kilómetro cuadrado, lo que representa un efecto zonal mucho mayor que el de una mina terrestre. Los efectos de una bomba en racimo son, por lo tanto, mucho más letales que los de una mina terrestre antipersonal ya que está diseñada para destruir vehículos blindados.

¿Quiénes resultan más afectados?

Se estima que las bombas en racimo han matado o herido a decenas de miles de civiles en todo el mundo.

Según Handicap International, en promedio, un cuarto de las víctimas civiles son niños. En algunas áreas, más del 50% de las víctimas son niños. El

d
u

pequeño tamaño y las formas curiosas de las bombetas dispersadas por las bombas en racimo las hacen particularmente interesantes a los ojos de los jóvenes. El 60% de las víctimas de bombas en racimo sufren daños físicos mientras están realizando sus actividades normales diarias de subsistencia en sus lugares habituales y acostumbrados.

El Centro de Noticias de la Organización de Naciones Unidas contiene la siguiente información: *“02 de noviembre, 2006 Los civiles constituyen el 98% de las víctimas de las bombas de racimo, según un informe de la organización Handicap International, presentado hoy en la sede de la ONU en Ginebra.*

Del total de víctimas, cerca del 27% son niños, denunció la organización no gubernamental (ONG) que colabora con la ONU.

El estudio dice que la mayoría de estas personas terminan heridas o muertas durante sus actividades cotidianas y no en momentos de conflicto armado.

“Las bombas de racimo pueden distribuir cientos de municiones en un área bastante extensa y estas municiones están diseñadas para matar, a diferencia de las minas antipersonales, diseñadas para herir al enemigo”, dijo Katleen Maes, coordinadora de Handicap Internacional para la asistencia a víctimas.

El informe aborda el impacto que poseen estos armamentos en la vida de las poblaciones de 24 países y señala que de los 360 millones de armas de este tipo que han sido utilizadas, todavía existen 33 millones que aún no han estallado.”⁴

¿Qué se ha hecho al respecto?

Varios foros de organizaciones de derechos humanos y derechos humanitarios vienen denunciando permanentemente los efectos desastrosos a los que se encuentra sometida la población civil por el uso de esta arma, los que van configurando el respaldo de la comunidad internacional en torno a la creación de un instrumento orientado a enfrentar el uso de las municiones de racimo en defensa de la vida y otras condiciones de subsistencia de las personas.

⁴ Tomado de la página Web <http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=8095>, acceso el 15 de julio de 2009



CORTE CONSTITUCIONAL

PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN

Caso N.º 0007-2009-TI

31

Así, varios Estados, Organizaciones de las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la «Cluster Munitions Coalition» (Coalición contra las bombas de racimo) y otras organizaciones humanitarias, reunidas el 22 y 23 de febrero del 2007, suscribieron la Declaración de Oslo, en la que acordaron concluir antes del 2008 un instrumento internacional jurídicamente vinculante que prohíba la utilización, la producción, la transferencia y el almacenamiento de bombas de racimo, que causan daños inaceptables a los civiles; eso fue conocido como “Proceso de Oslo”.

El Parlamento Europeo, mediante resolución del 25 de octubre del 2007, decidió favorablemente su participación en el camino hacia un tratado universal de prohibición de las bombas de racimo.

Ecuador fue sede de la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe sobre Municiones en Racimo, realizada los días 6 y 7 de noviembre del 2008, con el fin de promover la participación y firma de los países de la región del texto de la Convención sobre Municiones en Racimo, que tendría lugar en Oslo, Noruega, en el mes de diciembre del 2008 y posteriormente en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Los problemas jurídicos a resolver

A fin de emitir el correspondiente dictamen de constitucionalidad de la Convención sobre municiones en racimo, la Corte establece los siguientes problemas jurídicos:

¿Qué es el derecho humanitario?

¿Existen en la Constitución principios y valores que orienten la posición del Estado en la comunidad internacional con miras a una convivencia pacífica y de adhesión al derecho humanitario?

¿El texto del Convenio contiene normas que contradigan los mandatos constitucionales?

¿Cuál es el trámite que debe darse a la Convención para que entre en vigencia en la República?

cd
ce

El Derecho Internacional Humanitario

Según señala Cesáreo Gutiérrez Espada de la Universidad de Murcia, el concepto de Derecho Internacional Humanitario, entendido como el conjunto de principios y normas del Derecho Internacional que regulen el desarrollo de los conflictos armados internos o internacionales, no es suficientemente descriptivo, ya que el derecho internacional relativo a los conflictos armados tiene dos partes diferenciadas: a) una relativa a los modos, métodos y medios de hacer la guerra, dirigida a regular la utilización de ciertos tipos de armas y métodos de guerra; b) otra relativa a las normas orientadas a la protección de determinadas categorías de personas de los efectos de un conflicto armado; este último, *strictu sensu*, Derecho Internacional⁵.

En definitiva, el Derecho Internacional Humanitario se centra en la protección de las personas, con el fin de aliviar los sufrimientos de las víctimas de los conflictos armados: heridos, enfermos, náufragos, prisioneros o personas civiles.

El Derecho Internacional Humanitario se integra por cuatro tratados internacionales aprobados en Ginebra el 12 de agosto de 1949, por la Conferencia Diplomática, que se refiere a los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña, los heridos, enfermos y náufragos en el mar; al trato debido a los prisioneros de guerra y a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra; Los protocolos adicionales de 1977. El protocolo que se refiere a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y el que se refiere a la protección de las víctimas de los conflictos armados internos, que procedieron como consecuencia del surgimiento de nuevas formas de conflicto.

Además, integran el DIH otras Convenciones como la de La Haya de 1954 para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado; la Convención de 1972 sobre el desarrollo, producción y almacenamiento de armas biológicas y tóxicas y su destrucción; la Convención de 1980 sobre prohibiciones y restricciones de empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados; la Convención de 1993 sobre prohibición de producción de armas químicas y

⁵ Gutiérrez Espada Cesáreo, La Contribución del Estatuto de Roma (1988) sobre la Corte Penal Internacional y la Consolidación y Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario, en *Derechos y Libertades*, Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, Madrid, Imprenta Nacional del Boletín del Estado, 2000,



CORTE CONSTITUCIONAL

PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN

Caso N.º 0007-2009-TI

33

su destrucción; la Convención de 1997 sobre la prohibición de empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y su destrucción. Varios otros protocolos y convenciones especializados con el mismo carácter de protección humanitaria.

Si bien las normas del Derecho Humanitario se han desarrollado de manera independiente de las de Derechos Humanos, varias normas de los dos Derechos son similares y muchas veces complementarias y esto tiene razón de ser, pues la finalidad de uno y otro, aunque en distintas circunstancias, es la de protección a la persona.

Se puede señalar, en conclusión, que el Derecho Internacional Humanitario se orienta a proteger el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad individual, al honor y al debido proceso.

El Estado Ecuatoriano y la convivencia pacífica, la adhesión al derecho humanitario

La Constitución de la República contiene dos referencias expresas en relación a su posición en la comunidad internacional sobre su vocación de defensa de la paz, no solo como valor, sino como actitud hacia la práctica de relaciones que prohíben el uso de la fuerza en sus relaciones.

Así, el artículo 5, al establecer *“El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”* sienta las bases que permiten calificarlo como Estado absolutamente contrario a prácticas belicistas y su determinación soberana de impedir cualquier intento de injerencia militar en su territorio.

Por otra parte, el artículo constitucional 416, establece las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional, basadas en los intereses del pueblo al que rendirán cuentas sus responsables, y en tal sentido, entre otras previsiones, dispone: *4. Promueve la paz, el desarme universal; condena el desarrollo y uso de armas de destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones con propósitos militares de unos Estados en el territorio de otros”*. La norma transcrita contiene un designio por demás claro de su inequívoca disposición a mantener relaciones armónicas con las naciones del mundo, al propugnar el fin

d
cu

de la carrera armamentista y repudiar las prácticas inhumanas de utilización de armas destructivas, así como el uso de la fuerza o coerción entre Estados.

Las normas constitucionales señaladas dan cuenta de la adhesión del Estado Ecuatoriano a la defensa de la paz en el mundo, y de condena a prácticas que atentan a la convivencia pacífica de los pueblos, y no solo se queda en enunciaciones o postulados, sino además, contiene la voluntad de sancionar prácticas de esta naturaleza con el máximo rigor. En efecto, frente a delitos por genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada o crímenes de agresión a un Estado, el artículo 80 califica de “imprescriptibles” las acciones y penas por tales delitos y dispone que ninguno de estos casos será susceptible de amnistía.

En este contexto, es innegable que la Constitución de la República trasciende al ámbito internacional, en cuanto a los principios y valores de respeto a la dignidad humana que informa todo su contenido y que constituye la base del reconocimiento y protección de los derechos humanos que fundamentan la caracterización que hace al Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Es en este sentido que puede decirse, de manera concluyente, que la Constitución de la República coloca al Estado, partiendo de su posición de defensa de la paz, contrario a los conflictos armados, al uso de armas de destrucción masiva, protector de derechos, en situación favorable de reivindicar los altos objetivos del Derecho Humanitario. Al respecto, cabe indicar que el Estado ecuatoriano es suscriptor de varias convenciones y protocolos de esta naturaleza, como la de Ginebra, de la Haya, e incluso fue sede de la Conferencia de América Latina y del Caribe para definir la adhesión a la Convención sobre las municiones de racimo.

Por otra parte, es importante señalar que de conformidad con lo previsto en el artículo 417, la Constitución establece las bases que fundamentan la participación del Estado en la suscripción de instrumentos internacionales sobre derechos humanos, es decir, privilegia los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, su aplicabilidad directa y de cláusula abierta. Es precisamente la preocupación por el ser humano y sus derechos lo que sustenta el Derecho Internacional Humanitario.

d
CW



CORTE CONSTITUCIONAL

PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN

Caso N.º 0007-2009-TI

35

Control material de Constitucionalidad de la Convención sobre municiones de racimo

El control de constitucionalidad de la Convención parte del examen de sus disposiciones, contrastadas con el texto de la Constitución, sus principios, valores y normas. Al efecto, es pertinente realizar una breve referencia al contenido del instrumento internacional a aprobarse y ratificarse.

El preámbulo de la Convención hace referencia a las preocupaciones de la comunidad internacional por las afectaciones producidas por las municiones de racimo y los riesgos que produce la existencia de municiones sin explotar, así como el peligro de la conservación de estas armas, la decisión de poner fin a este sufrimiento, dar asistencia a las víctimas, abordar necesidades especiales de grupos vulnerados; ofrece, por tanto, un contenido de carácter humanitario frente al problema y realiza una cronología del Proceso de Oslo y su propuesta de prohibir el uso de las letales armas, motivo de la Convención. Los contenidos del preámbulo se realizan en defensa de principios y derechos en torno a la población civil, estableciendo diferencias con los combatientes, objetivos militares y a los bienes de carácter civil, como objeto de protección frente a los peligros derivados de las operaciones militares.

El artículo 1 establece el compromiso para cada Estado Parte de no emplear, desarrollar, producir, adquirir, almacenar, conservar ni alentar actividades prohibidas, municiones de racimo, entre otras obligaciones asumidas.

El artículo 2 contiene definiciones de municiones, submuniciones, situaciones que pueden presentarse en su uso y otros aspectos como quienes son víctimas, mecanismo de destrucción, entre otros, que permiten una correcta lectura de la Convención.

El artículo 3 determina el compromiso de los Estados parte, de conformidad con la legislación nacional, para la separación de las municiones, control de municiones conservadas, el compromiso de destruir o asegurar la destrucción, asegurando el cumplimiento de normas internacionales para la protección de salud pública y medio ambiente, los procedimientos a seguir para obtener prórroga del plazo para el cumplimiento de estos fines.

El artículo 4 contiene el compromiso de los Estados Parte de limpiar y destruir o asegurar la limpieza o destrucción de municiones en racimo, ubicadas en áreas bajo su jurisdicción o control, estableciendo mecanismos, consultas y

de
aw

trámites a adoptarse para el cumplimiento de lo convenido en virtud de este artículo.

Los artículos 5 y 6 precisan aspectos relativos a la asistencia a las víctimas de las municiones en áreas bajo la jurisdicción de los Estados Parte, de conformidad con el Derecho Humanitario Internacional y con el Derecho Internacional de Derechos Humanos, así como disposiciones relativas a la asistencia y cooperación internacional a la que tienen derecho las partes y la que pueden ofrecer los Estados que estén en condiciones de hacerlo.

El artículo 7 prevé la obligación de los Estados Parte de informar al Secretario General de las Naciones Unidas respecto a las medidas de implementación de la Convención a nivel nacional, a efectos de su cumplimiento, así como información relativa al total de municiones separadas, características técnicas, avance de destrucción y otras relacionadas con el cumplimiento de medidas descritas.

El artículo 8 contiene el acuerdo de los Estados Parte para consultarse y cooperar en la aplicación y cumplimiento de las disposiciones de la Convención y los pasos a seguir para aclarar cuestiones relacionadas con asuntos del cumplimiento

El artículo 9 establece la obligación de los Estados de adoptar medidas legales, administrativas y de otra índole para implementar la convención de manera especial y la imposición de sanciones penales para prevenir y reprimir actividades prohibidas en el Instrumento.

Los artículos 10, 11 y 12 prevén la solución de controversias, reuniones regulares, exámenes de evaluación y estado de aplicación de la Convención.

El artículo 13 establece lo relativo a las enmiendas que podrán plantearse en cualquier momento, una vez que entre en vigor el presente documento.

El artículo 14 hace referencia a costos y tareas administrativas.

Los artículos 15 a 20 disponen aspectos relacionados a la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, entrada en vigor, aplicación provisional, reservas, duración y denuncia.

d



CORTE CONSTITUCIONAL

PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN

Caso N.º 0007-2009-TI

37

El artículo 21 prevé aspectos relativos a la relación con Estados no parte en la Convención, a fin de alentar su participación y lograr la vinculación de todos los Estados a la Convención.

Como puede establecerse, el objetivo del Convenio es eminentemente humanitario y de asistencia y cooperación entre los Estados para poder enfrentar tanto las consecuencias perjudiciales de bombas, cuyas características de alto contenido explosivo y de dispersión, vienen ocasionando graves daños a amplios sectores de población que se encuentran cerca de áreas de conflictos, como el riesgo que presentan las bombas que pueden hallarse abandonadas por no haber estallado, así como para lograr la destrucción de reservas de estas armas letales para civiles que nada tienen que ver con conflictos internos o internacionales.

Por otra parte, la asistencia a las víctimas, sus familiares o comunidades afectadas por el empleo de municiones de racimo de efectos indiscriminados, tiene relación con el respeto y realización de sus derechos, pues la pérdida de la vida de padres de familia que sustentan el hogar, el sufrimiento o daños físicos y/o psicológicos ocasionados, las pérdidas económicas, la marginación social, son hechos que demandan la atención de sectores y grupos que se tornan más vulnerables, cuyos derechos a la vida, salud, integridad física, libertad y dignidad de las personas contra los abusos del poder, demandan mayor protección, tanto más si se toma en cuenta que en estos grupos se encuentran niños, a quienes se debe dar atención privilegiada.

Los objetivos y mecanismos de aplicación de la Convención se enmarcan en los principios y valores que guían a la Constitución hacia una convivencia pacífica en el ámbito internacional e interno, de promoción del desarme mundial, de condena de las armas de destrucción masiva, por una parte, y por otra, en los principios que orientan la Carta Fundamental en el reconocimiento y protección de derechos de las personas.

La Convención, además, se inscribe en los principios que guían la participación del Estado en la suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos, como son la preocupación por el ser humano y la vigencia de sus derechos, es así como informa el Convenio la decisión de los Estados Parte, de “asegurar la plena realización de los derechos de todas las víctimas de municiones” y el reconocimiento “de su inherente integridad”.

d
cc

Tanto en los contenidos de la Convención referidos a los objetivos y compromisos adoptados, así como en los mecanismos de implementación de los acuerdos de la administración del Instrumento y los demás aspectos de cumplimiento del instrumento internacional, la Corte no encuentra disposiciones que contraríen principios, valores, derechos o normas de la Constitución de la República, por lo que considera que no existe impedimento para su aprobación y ratificación, en aplicación del procedimiento previsto constitucionalmente para el efecto.

El trámite que se dará a la Convención para su entrada en vigencia

Conforme al análisis que realizó la Corte en el punto II de esta sentencia para determinar su Competencia en esta causa, corresponde a la Asamblea Nacional aprobar la Convención, previamente a la ratificación del Presidente de la República, por cuanto contiene la obligación del Estado ecuatoriano de adecuar su legislación penal en lo relativo a la tipificación de sanciones para viabilizar la prevención y represión de actividades prohibidas en la Convención, de acuerdo con lo determinado en el artículo 419, numeral 3 de la Constitución de la República.

Realizado el examen de constitucionalidad en las anteriores consideraciones, el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición:

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República, el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, en ejercicio de sus atribuciones,

DICTAMINA:

- 1.- Emitir dictamen de constitucionalidad favorable para la aprobación de la Convención sobre Municiones de Racimo, por adecuarse plenamente al texto de la Constitución de la República;
- 2.- Declarar que al mantener el Acuerdo examinado plena armonía y concordancia con los preceptos consagrados en la Norma Fundamental ecuatoriana, es procedente continuar con el trámite pertinente para su aprobación y posterior ratificación;

d
ml



CORTE CONSTITUCIONAL

PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN

Caso N.º 0007-2009-TI

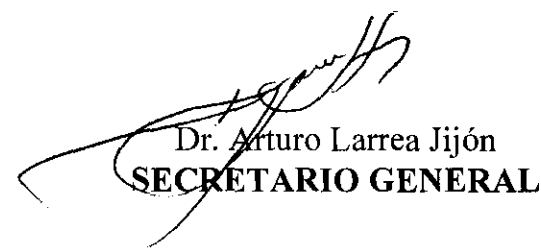
39

- 3.- Devolver el expediente al señor Presidente Constitucional de la República;
- 4.- Notifíquese, publíquese y cúmplase.


Dr. Patricio Pazmiño Freire
PRESIDENTE


Dr. Arturo Larrea Jijón
SECRETARIO GENERAL

Razón: Siento por tal, que el Dictamen que antecede fue aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, con siete votos a favor, de los señores doctores: Patricio Herrera Betancourt, Alfonso Luz Yunes, Diego Pazmiño Holguín, Fabián Sancho Lobato, Manuel Viteri Olvera, Edgar Zárate Zárate y Patricio Pazmiño Freire; sin contar con la presencia de los doctores: Luis Jaramillo Gavilanes y Hernando Morales Vinuesa, en sesión extraordinaria de jueves 13 de agosto del 2009. Lo certifico.


Dr. Arturo Larrea Jijón
SECRETARIO GENERAL

At./pga/ccp



